

# El acuerdo de austeridad de la UE no funcionará. Los trabajadores irlandeses se enfrentan a un futuro desalentador

*Frank Connolly*

La cumbre de la UE del viernes 9 de diciembre de 2011, durante la cual 26 de los 27 países miembros acordaron un nuevo tratado intergubernamental que incluye un «pacto fiscal» para promover la disciplina presupuestaria en aquellos Estados que incumplan el límite de déficit público fijado por la UE en el 3 por ciento del PIB, no proporcionará la estrategia de crecimiento necesaria para ayudar a los países de la zona del euro gravemente endeudados a salir de la recesión.

Las propuestas de pacto fiscal no resolverán los problemas del euro para los europeos, sino que al implantar un déficit anual estructural que no supere el 0,5 por ciento del PIB lo que harán será «institucionalizar la austeridad». Una estrategia de crecimiento y de recuperación rápida de la creación de empleo brilla por su ausencia. Sin una estrategia de este tipo, no parece que a simple vista los países en crisis vayan a ver aliviada su situación.

La cumbre, dominada por consideraciones políticas y financieras alemanas y francesas, tampoco incluye ninguna propuesta de reestructuración de la deuda, eurobonos o algún tipo de mecanismo fiscal de transferencia para dirigir recursos de las regiones prósperas a las que se están debatiendo contra la recesión.

El factor clave que resulta de este Consejo Europeo es que los países que cargan con una deuda insostenible tendrán aún menos perspectivas de crecimiento. Esto es muy cierto en el caso de Irlanda, donde el «pacto fiscal» europeo restringirá en gran medida el espacio de política para futuros gobiernos irlandeses. Se trata quizás de la mayor amenaza que afronta la recuperación de una economía que está restableciéndose del peso de la línea de crédito de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en 2010 de 63.000 millones de euros a un elevado tipo de interés y de la exorbitante carga de deuda soberana que ha seguido a la recapitalización de los principales bancos.

De hecho, la introducción de multas automáticas a los gobiernos que incumplan el límite del 3 por ciento planteará considerables dificultades a países como Irlanda, que necesitan crecimiento económico para aliviar su actual carga de la deuda.

### *El pacto fiscal, la peor solución para Irlanda*

Para la economía irlandesa este pacto fiscal o plan de «austeridad» diseñado por Alemania, como lo describen hoy los partidos de la oposición, no podía llegar en peor momento, con un desempleo superior al 14,4 por ciento en el tercer trimestre de 2011 y una población que lleva tiempo desempleada de más del 56 por ciento del total de personas que no tienen empleo. En el mismo período, la economía irlandesa registró la contracción más rápida de los últimos dos años.

Con unas finanzas estatales que dependen por completo de los fondos del Banco Central Europeo y un presupuesto que a principios de diciembre absorbió otros 3.800 millones de euros de la economía a través de recortes a la administración pública, reducciones de gastos de capital, y sobre todo impuestos indirectos, las perspectivas de recuperación a corto plazo posibles no parecen nada halagüeñas y los organismos oficiales han reducido las previsiones de crecimiento para 2012 a menos de un 1 por ciento. Las tambaleantes economías de los Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de Europa preocupan especialmente a un país que depende en gran medida de una recuperación impulsada por las exportaciones.

**Para el movimiento sindical y las fuerzas políticas progresistas las perspectivas son desoladoras**

Para el movimiento sindical y las fuerzas políticas progresistas de Irlanda las perspectivas son desoladoras. En el sombrío horizonte se encuentra la elaboración de lo que parece ser la estrategia del capital financiero europeo, principalmente alemán, para lograr lo imposible, crecimiento mediante austeridad. En todos aquellos casos en que se alega que ha funcionado, esta estrategia siempre ha ido acompañada de una política monetaria flexible. Pero, hasta la fecha, se ha excluido la intervención del Banco Central Europeo.

En su lugar, la fórmula consiste en recortar las pensiones, dismantelar los derechos de las personas en el trabajo a través de lo que eufemísticamente llaman «reformas del mercado de trabajo» y vender activos lucrativos del Estado a buitres corporativos a precios de saldo. De lo que se trata es de echar por la borda lo que queda de las conquistas logradas por la clase trabajadora en toda Europa en el contexto de los acuerdos de posguerra. Por lo que parece, el objetivo es abandonar el mayor número posible de los logros alcanzados por la llamada «Europa social», para que el capital europeo pueda participar más eficazmente en la espiral global descendente.

No es sorprendente que las estrategias impulsadas por la austeridad estén aplicándose en unos tiempos en que partidos de centroderecha y abiertamente de derechas dominan el mapa político europeo. No obstante, la posibilidad, aunque exigua, de reinstauración de gobiernos socialistas o socialdemócratas tras las elecciones previstas este año y el que viene en Alemania y Francia, y por supuesto, la supervivencia de Barack Obama en un segundo mandato en los Estados Unidos, brindan un atisbo de esperanza para la recuperación de la cordura en las políticas fiscales y económicas mundiales.

Quizás sea demasiado poco y demasiado tarde, por lo menos en lo que a Irlanda respecta, donde durante los cinco últimos años ya se ha despojado a la economía de 20.600 millones de euros y donde, como consecuencia del préstamo CE/BCE/FMI, está previsto recortar 12.400 millones de euros durante los cuatro próximos años. Desde 2009 se ha venido desposeyendo a la economía del equivalente al 13,4 por ciento del PIB, y está previsto que para 2015, la cifra aumente un 8 por ciento.

Este «ajuste» ha conllevado recortes sin precedentes a los salarios y las pensiones de los trabajadores de la administración pública, así como un grave deterioro de los servicios de bienestar social, los destinados a las personas enfermas, las personas mayores y las personas vulnerables. Ha supuesto la reducción drástica del gasto en proyectos de capital vitales que podrían crear puestos de trabajo para las decenas de miles de los trabajadores de la construcción y otros trabajadores que han perdido su empleo desde el colapso de 2008. Si bien las empresas privadas que dependen de la exportación han mantenido sus empleos y sus sueldos, como el panorama internacional dista mucho de ser favorable, la fabricación, el comercio minorista y otros sectores potencialmente generadores de riqueza del país registran una actividad escasa y decreciente.

### *El endeudamiento irlandés es insostenible*

Ensombreciendo este panorama encontramos la masiva carga de deuda soberana que se espera alcance un máximo de cerca del 120 por ciento del PIB en 2013, importe que no incluye los considerables compromisos contraídos con los bancos. El total del pasivo bancario y soberano (contingente y real) del Estado se acerca a un exorbitante 235 por ciento del PIB.

Es evidente que el Estado irlandés no puede reducir esta deuda a un nivel aceptable sin una cancelación de la misma apoyada por la UE mediante la emisión de bonos garantizados del BCE y una serie de medidas acordadas. Para la mayoría de los ciudadanos irlandeses es inaceptable que el Estado esté obligado a abonar pagarés anuales sobre las deudas de bancos tóxicos ya desaparecidos que solicitaron préstamos a bajo interés durante la prolongada y artificial burbuja inmobiliaria, alentados por entidades financieras alemanas, francesas, británicas y otras que ahora pretenden recuperar el dinero adeudado a un tipo de interés elevado.

***Para la mayoría de los ciudadanos irlandeses es inaceptable que el Estado esté obligado a abonar pagarés anuales sobre las deudas de bancos tóxicos ya desaparecidos***

Es un hecho aceptado que, a nivel nacional, la culpa es de los políticos desorientados e incompetentes que han promovido la evolución de una reglamentación de los sectores bancarios y financieros que no se aplica con rigor. A finales de 2010 cien mil trabajadores irlandeses ocuparon las calles de Dublín durante la semana en que la troika CE/BCE/FMI llegó a la ciudad para asumir el control del destino económico de su

país. La ira y la desesperación, si bien no podían compararse a la violencia callejera registrada en Grecia, eran palpables y resultaron en la caída, en las elecciones generales de febrero de 2011, del partido de centroderecha Fianna Fáil, que había liderado tres gobiernos sucesivos de centroderecha desde 1997.

En un giro espectacular e histórico, alrededor del 40 por ciento de los votantes apoyaron a los partidos de izquierdas, el doble de lo que tradicionalmente habían representado en el país. El Partido Laborista, el partido de izquierdas más importante, formó un gobierno de coalición con Fine Gael (FG), que ha sustituido a su adversario de largos años, el hoy fuertemente debilitado Fianna Fáil, el principal partido de la derecha. La política gubernamental refleja de manera aproximada el equilibrio del poder (2 a 1) entre Fine Gael y el Partido Laborista, que en el presupuesto de diciembre de 2011 consiguió garantizar una relación entre reducción del gasto público e imposición tributaria de 56 a 44, frente al 75 a 25 previsto en el manifiesto de Fine Gael.

### *Un tremendo desafío para la izquierda*

Siguen librándose importantes batallas gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con los mecanismos que protegen a los trabajadores mal remunerados, sobre el derecho de negociación colectiva, que aún no está consagrado en la legislación irlandesa y con el que está comprometido el Partido Laborista, así como sobre el empleo comunitario financiado con fondos públicos y otros planes de protección social que proporcionan asistencia e ingresos a las personas más vulnerables y a sus comunidades.

Los presupuestos de salud y de educación también están sometidos a una gran presión, al igual que lo está siendo un acuerdo para la protección de los salarios y los empleos de los trabajadores del sector público a cambio de una profunda racionalización y ahorro en los costos en la administración de los servicios prestados por el Gobierno, presión que ejercen los grupos de empleadores y las fuerzas de la derecha, alentados por unos medios de comunicación maleables, para que sean los menos responsables del colapso económico y financiero los que carguen con sus consecuencias. Mientras, no están desplegándose esfuerzos coherentes o serios para gravar con impuestos al considerable número de personas de la sociedad irlandesa que ha acumulado riqueza, tanto en su país como en el extranjero. La brecha entre los que se encuentran arriba y los que se encuentran abajo sigue ampliándose, se calcula que el 5 por ciento de la población controla alrededor del 48 por ciento de los activos del país. Para ilustrar la escala de desigualdad cabe observar que, en 2009, Irlanda registró la segunda tasa de recaudación fiscal más baja de los 27 Estados miembros de la Unión Europea como proporción del PIB y se clasificó en el lugar 27 de los 34 entre los Estados miembros de la OCDE (fuente: Eurostat y OCDE).

La modestas propuestas del Sindicato de Servicios Industriales, Profesionales y Técnicos (SIPTU) de Irlanda para incentivar los fondos de pensiones bien dotados y

recaudar aproximadamente 4.000 millones de euros, alrededor del 5 por ciento de los balances de los fondos de pensiones, para inversiones, aún no se han adoptado, aunque están siendo estudiadas por el Gobierno. Junto a los 2.000 millones de euros procedentes del residuo del fondo nacional de reserva del sistema de pensiones, se generarían cientos de miles de empleos que contribuirían a encauzar el crecimiento.

Está claro que el desafío al que se enfrentan el movimiento sindical y las fuerzas progresistas en Irlanda, y en el mundo, es verdaderamente impresionante. Si la Unión Europea insiste en imponer una austeridad aún mayor sin perspectiva alguna de recuperación, es muy posible que los irlandeses se nieguen a aceptar toda invitación para alterar los tratados existentes a través de un referéndum. Es preciso encontrar un camino nuevo, más justo.

*Frank Connolly es el Jefe de Comunicaciones del SIPTU (Sindicato de Servicios Industriales, Profesionales y Técnicos). El SIPTU, con cerca de 200.000 miembros, es el sindicato más grande de Irlanda, que cuenta con una fuerza de trabajo sindicada de 800.000 trabajadores y una fuerza de trabajo total de 1,8 millones de personas.*